



# La industria azucarera mexicana durante la década de los años noventa

Víctor Manuel Castillo Girón \*

Alma Alicia Aguirre Jiménez \*\*

*Desde 1982 México asiste a una reorientación profunda de la política económica que se inscribe dentro de la línea de la liberalización económica y de integración en la economía internacional. En el presente trabajo doy cuenta de una parte del proceso derivado de la aplicación de dicho modelo. De manera particular hago una exposición de las singularidades que han acompañado a la industria azucarera mexicana durante la última década, es decir en el contexto posterior a la transferencia de esta industria por parte del Estado a la iniciativa privada. Para eso inicio presentando el contexto que rodea dicho proceso de privatización así como los mecanismos puestos en marcha para su ejecución. Enseguida se hace un análisis de los resultados en materia cañero-azucarera bajo la actuación de los grupos industriales privados que asumieron las funciones productivas esenciales de esta actividad. Finalmente, antes de hacer algunas propuestas para orientar el desarrollo de esta agroindustria, me refiero a los elementos principales puestos en el debate para explicar las razones por las cuales actualmente esta industria se encuentra en una profunda crisis.*

## El proceso de privatización de la industria azucarera

DURANTE el período de 1970 a 1988, el Estado mexicano realizó un conjunto de acciones orientadas a revertir las tendencias negativas de la producción cañero-azucarera iniciadas en 1967, luego de una etapa expansiva, y a reordenar

\* Investigador titular del Departamento de Estudios Regionales, INESER, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.

\*\* Investigador Asociado del Departamento de Estudios Regionales, INESER, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.

el desarrollo de la industria azucarera nacional. Entre las acciones oficiales de esa época, sobresale la constante intervención y adquisición por parte del gobierno federal de muchas fábricas o ingenios azucareros de origen privado.<sup>1</sup> Asimismo destacan la fijación de un precio de garantía tanto para la caña de azúcar como para los diferentes tipos de azúcar, el control total del comercio interno y externo de este edulcorante,<sup>2</sup> así como en la distribución y venta de los otros subproductos de la caña de azúcar. El gobierno federal, además, era el responsable de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria cañero-azucarera (García, 1997: 146-147).

En el trabajo de García (1997: 15-21) puede apreciarse que bajo este esquema de intervención estatal, durante los años 1970 a 1988 la superficie cosechada de caña de azúcar se incrementó en un 35 % y el número de productores de este cultivo aumentó en 56 %. Además, el rendimiento en campo se incrementó un 8 % en promedio, y el rendimiento agroindustrial o cantidad de azúcar por hectárea creció en un 15 %. Asimismo, durante esos años se logró una mejoría en la capacidad instalada de molienda de caña y el rendimiento en fábrica creció modestamente. De igual manera, el productor de caña de azúcar y el personal que trabajaba en los ingenios tuvieron una mejoría en sus ingresos. Desde 1985, gracias al Programa Institucional de Mediano Plazo (1984-1988) puesto en marcha por la administración del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) la producción nacional de azúcar superó la demanda interna e incluso, una parte de esta pudo venderse en el mercado internacional.<sup>3</sup>

Ahora bien, dicho funcionamiento de la industria azucarera también estuvo acompañado de graves deficiencias. Una de las más importantes fue el incremento constante en los gastos administrativos de los ingenios bajo el control del gobierno federal. Paralelamente también aumentó el apoyo crediticio y los subsidios del Estado para cubrir las crecientes pérdidas de operación de los ingenios azucareros.<sup>4</sup> De hecho, esas deficiencias sirvieron como caldo de cultivo para que a finales del gobierno de Miguel de la Madrid la política azucarera diera un giro importante. En efecto, en enero de 1988 el gobierno mexicano anunció por vez primera su intención de vender una parte de los ingenios administrados por Azúcar, S.A.<sup>5</sup> Según los principales funcionarios de esta entidad paraestatal, con dicha acción se apostaba a la iniciativa privada como un móvil decisivo para sanear las finanzas públicas y sobre todo, para hacer un mejor uso de los recursos e incrementar la productividad de la industria azucarera nacional.<sup>6</sup>

### **La transferencia de las factorías azucareras a la iniciativa privada**

Así, como parte de esta determinación de salir de la producción azucarera, entre abril y octubre de 1988 el gobierno de Miguel de la Madrid publicó tres convocatorias para vender los ingenios bajo la administración de Azúcar, S.A. Para tratar de evitar la concentración de la industria en unos cuantos actores propietarios los ingenios se licitaron en paquetes o grupos (García, 1997: 147). Como resultado de estas tres licitaciones, a finales de noviembre de 1988, al terminar la presidencia de Miguel de la Madrid, ya se habían privatizado unos veintiún ingenios. El resto se vendió entre 1989 y 1991, durante la administración federal del presidente Carlos Salinas (diciembre de 1988 a noviembre de 1994).

Ahora bien, aun cuando hubo varias iniciativas de compra por parte de las organizaciones de productores de caña de azúcar y de los obreros de las fábricas azucareras del país,<sup>7</sup> prácticamente todos los ingenios azucareros que antes administraba el Estado fueron adquiridos por unas quince compañías que utilizaban los productos derivados de la caña de azúcar como insumo para la elaboración de bebidas no alcohólicas,<sup>8</sup> principalmente, así como de pan dulce, papel y otros productos en sus industrias secundarias (Otero y Singelmann, 1996: 188).<sup>9</sup> En general, los ingenios administrados por el gobierno federal fueron transferidos a los particulares mediante el pago de un 10 % a 15 % de enganche sobre el precio estimado y con un plazo máximo de diez años para cubrir la totalidad del pago. En el ánimo de los compradores influyó la disponibilidad de crédito financiero nacional e internacional con tasas de interés a la baja, así como por las proyecciones halagüeñas en la demanda de azúcar por el crecimiento natural del mercado.<sup>10</sup>

Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas, además de la venta de los ingenios, el Estado mexicano también se empeñó en alcanzar una total privatización de la industria azucarera y en una inserción comercial de este sector en el mercado internacional. La administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), va a prolongar la vigencia de esta fase durante la década de los años noventa.

### **La total privatización de la industria azucarera nacional y la inserción comercial hacia el exterior**

Entre los pasos claves de la administración del presidente Salinas para privatizar totalmente la industria azucarera destaca la liquidación y reestructuración de diversas instituciones de servicios para esta agroindustria, al igual que de la gran mayoría de fideicomisos de apoyo a los productores de caña de azúcar

y a los obreros de la industria azucarera. Tal es el caso de la liquidación de Azúcar, S.A.; del Instituto para el Mejoramiento de la Producción Azucarera (IMPA); del Fideicomiso de Maquinaria de la Industria Azucarera (FIMAIA); del Fideicomiso de Obras Sociales de Cañeros de Escasos recursos (FIOSCER). Asimismo hubo una reducción considerable del personal de Financiera Nacional Azucarera, S.A. (FINASA), y una restricción muy fuerte del Fideicomiso de Construcción de Casas para Obreros de la Industria Azucarera (FICOIA).

El proyecto de transformación y cambio del esquema productivo se acompañó también de modificaciones a la Legislación Cañera. El grueso de estas se pusieron en marcha con el Decreto Cañero publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1991. En este decreto se declara de interés público,<sup>11</sup> la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar. Los términos de este decreto y los lineamientos relativos publicados posteriormente por el Comité de la Agroindustria Azucarera<sup>12</sup>, creado para coadyuvar el cumplimiento de dicho decreto, sentaron las bases para una nueva relación entre los productores de caña de azúcar y los dueños de las factorías azucareras. En este sentido destacan dos aspectos.

El primero tiene que ver con la necesidad de que los industriales dueños de ingenios azucareros y sus abastecedores de caña de azúcar suscriban un contrato de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar. Las disposiciones de estos contratos son uniformes para todo el país y es celebrado por cada productor en lo individual. La procedencia y vigilancia de estos contratos corresponde al Comité de Producción Cañera de cada ingenio azucarero quien, en caso de ser necesario, podrá recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras cuyos fallos y resoluciones deben ser acatadas y cumplidas por las partes. Los Comités de Producción Cañera deben integrarse por el presidente o secretario general de los comités ejecutivos de las organizaciones de productores locales y por el gerente del ingenio de que se trate, o bien por la persona que para tal efecto designe la empresa en cuestión. Las organizaciones de productores representadas deberán estar afiliadas a las organizaciones nacionales cañeras pertenecientes a la Confederación Campesina (CNC) o a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP). A los comités cañeros, además de vigilar el cumplimiento de las diversas normas y reglamentos de carácter general para la industria azucarera nacional, también les corresponde formular y dar seguimiento a los programas anuales de producción, cosecha y operación de la factoría en la parte que intervenga en la determinación del precio de la caña de azúcar.<sup>13</sup>

El segundo aspecto que resalta del decreto cañero citado es la derogación del sistema de pago de caña de azúcar, vigente desde diciembre de 1979, con base a un precio de garantía, considerando un mínimo de 83 kilogramos de azúcar base estándar (KABE) por cada tonelada de caña de azúcar procesada. De conformidad con el sistema de pago propuesto en el decreto de 1991, a partir de la zafra 1991/1992 el monto pagado por los ingenios a sus abastecedores de caña de azúcar tuvo relación con la cantidad de azúcar que técnicamente es factible recuperar durante el proceso que sigue la caña de azúcar en el ingenio azucarero, llamada azúcar recuperable base estándar. Bajo este esquema, hasta la zafra 1994/1995 el ingreso bruto anual de cada productor se determinó con base al volumen neto de caña de azúcar entregada al ingenio multiplicado por el rendimiento promedio ponderado de azúcar recuperable base estándar obtenido por el ingenio en cuestión, a razón de 54 % del precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar estándar, libre a bordo ingenio, vigente el día primero del mes en que se hace el pago correspondiente. A partir de la zafra 1995/1996 este último porcentaje se incrementó a 57 %. Para la zafra 1997/1998 y siguientes el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña de azúcar se define con base a la llamada “fórmula harvariana” dada a conocer el 26 de marzo de 1997 y reformada mediante otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1998. Con el objetivo de incorporar todos aquellos factores que afectan la comercialización del azúcar, en esta fórmula se considera el precio promedio del azúcar estándar reportado por el Servicio Nacional de Información de Mercado (SNIM) durante los meses de octubre a septiembre de la zafra inmediata anterior, en vez de considerar solamente el mes correspondiente a la liquidación como proponía el acuerdo cañero de 1991, y en lugar de tomar en cuenta el trimestre julio a septiembre, como se proponía en el acuerdo del 26 de marzo de 1997.

En concordancia con la privatización de las factorías azucareras, el Estado mexicano también fue abandonando su injerencia en la comercialización de los productos derivados de la caña de azúcar. De esta manera, desde finales de 1988 las industrias secundarias que emplean la materia prima producida en sus propios ingenios azucareros fueron exonerados de pagar el impuesto del 50 % que anteriormente los ingenios privados debían de pagar por vender sus productos directamente a otras industrias (Otero y Singelmann, 1996: 188). Asimismo, en noviembre de 1989 se autorizó la libre importación de azúcar por los agentes privados.<sup>14</sup> Posteriormente, en 1993, fue liquidada Azúcar, S.A., entidad mediante la cual el gobierno federal controlaba la mayor parte de la producción de azúcar y el monopolio en la comercialización de los productos derivados de la caña de azúcar. La puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), en enero de 1994, representó la culminación del proceso citado.

Para el presidente Salinas, el Tratado de Libre Comercio, agregado a la transferencia de las tareas del Estado a la iniciativa privada, era la graduación de México para alcanzar la eficiencia y la competitividad en todos sus ámbitos. En el caso particular de la industria azucarera, las negociaciones avaladas por el gobierno mexicano prometían nuevas oportunidades para exportar azúcar a los Estados Unidos, siempre y cuando se tuviera un excedente exportable. Según este acuerdo, la plena liberalización comercial del azúcar se realizará en un período de quince años, conforme a una transición programada en tres etapas. La primera abarca seis años (1994-1999),<sup>15</sup> en los que la cuota anual de exportación de azúcar desde México hacia Estados Unidos está limitada a 25 000 toneladas; la segunda etapa dura 8 años (2000-2007), donde la cuota anual de exportación se incrementa a 150 000 toneladas anuales, con la observancia que podrán exportarse al mercado estadounidense todos los excedentes mexicanos de azúcar si México es productor superávitario por dos años consecutivos; finalmente, a partir del primero de octubre del año 2008 habrá libre comercio de azúcar entre México y Estados Unidos (véase tabla I).

### **Los resultados de la privatización** <sup>16</sup>

En 1989, en pleno auge de la privatización de los ingenios azucareros, la industria azucarera nacional inició una de sus crisis más severas desde los años veinte (Otero y Singelmann, 1996: 189, 190). Entre 1989 a 1994 la conjunción de los malos cálculos de la oferta <sup>17</sup> (ibidem) junto a la entrada de grandes volúmenes de azúcar del extranjero, <sup>18</sup> propiciaron un excedente de dicho bien para el cual no había la suficiente infraestructura de almacenamiento ni de distribución. Con ello, los precios de mercado para el azúcar industrial se hundieron hasta con 15 % por debajo del precio concertado fijado por el gobierno. Esto, acompañado de un incremento en los costos de producción, provocó que hacia 1993 más de una tercera parte de las factorías azucareras del país tuvieron dificultades financieras, <sup>19</sup> y que por esas mismas razones tres de ellas no trabajaran a partir de la zafra 1993-1994 (Suárez y Pérez, 1999: 76; García, 1997: 2, 147; Otero y Singelmann, 1996: 190-191). Paralelamente, los industriales se retrasaron en los pagos de sus créditos financieros con Financiera Nacional Azucarera (FINASA) <sup>20</sup> y muchas factorías disminuyeron el monto del financiamiento para las actividades productivas de los agricultores cañeros y paralelamente dejaron de cumplir algunos de sus compromisos con las organizaciones gremiales de obreros <sup>21</sup> y de cubrir sus deudas con los productores de caña de azúcar al finalizar la zafra. <sup>22</sup> En consecuencia, hubo recortes de puestos laborales en los ingenios laborales así como

una reducción de los rendimientos tanto en los campos agrícolas como en la fábrica (Otero y Singelmann, 1996: 190-192).

Ahora bien, desde la zafra 1994-1995 la producción azucarera nacional volvió a repuntar (véase tabla 2). En ese mismo ciclo, luego de seis zafras de producción deficitaria, la oferta nacional superó a la demanda interna en cerca de 400 000 toneladas. Desde entonces y hasta la zafra 1999-2000, el excedente nacional anual se ha mantenido en unas 600 000 toneladas anuales, en promedio, con excepción de la zafra 1997-1998 cuando se produjeron casi 1 millón de toneladas de azúcar por encima del consumo nacional aproximado de 4,2 millones de toneladas de este edulcorante.

Este incremento se asocia, sobre todo, con una mejoría de los rendimientos en las factorías azucareras. Entre las circunstancias que explican el origen de esta fase expansiva de la producción destaca la liberación del precio del azúcar a partir de febrero de 1996, bajo un esquema que incluyó un aumento gradual de 25 % de su valor, entre el 24 de agosto de 1995 y el 15 de febrero de 1996. De acuerdo con el anuncio oficial de esta medida,<sup>23</sup> dicho aumento de los precios del azúcar permitiría a los ingenios azucareros tener mayores ingresos para iniciar un programa de modernización tecnológica y poder cubrir sus compromisos con los productores de caña y con los obreros. Por lo demás, en tanto que el decreto cañero establece una relación directa entre el precio del azúcar en el mercado y el del precio de la caña de azúcar, esta medida supone un estímulo adicional para la siembra de este cultivo. Sobre este último aspecto, el subdirector del área de agronegocios de Banamex,<sup>24</sup> considera que la explosión en la producción de azúcar en México se debió más bien al crecimiento de tierras dedicadas a esta actividad ya que no había otra actividad tan rentable y a que el ingenio azucarero asegura el pago de la caña. Según este mismo funcionario bancario, dicho incremento de la superficie cultivada con caña de azúcar ha carecido de un verdadero cambio tecnológico.

La segunda circunstancia asociada a esta recuperación dinámica de la industria azucarera tiene relación con las acciones derivadas del Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca aprobado por el gobierno federal en abril de 1995 como una respuesta emergente ante los efectos drásticos de la devaluación del peso en diciembre de 1994. Con base en ese programa, 46 factorías azucareras reestructuraron sus adeudos con Financiera Nacional Azucarera (FINASA) en unidades de inversión (UDIs),<sup>25</sup> a plazos de 7, 10 y 15 años, en todos los casos con un periodo de gracia de 3 años, y tasas de interés de 7, 8 y 9 % respectivamente. Así, los industriales que se acogieron a este proceso de reestructuración aligeraron en el corto plazo el importe de sus pagos y, entonces, pudieron realizar cierta mejoría de sus sistemas productivos.

Paradójicamente, en paralelo con esta fase de crecimiento de la oferta nacional de azúcar, también arreciaron los problemas financieros de las factorías azucareras del país. En efecto, en noviembre de 1998 el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcohólica advertía que ocho factorías azucareras podrían dejar de trabajar al iniciar la zafra 1998-1999.<sup>26</sup> Casi un año más tarde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo público que la deuda de los grupos azucareros era cercana a 2 500 millones de dólares (véase tabla 3) y, pocos meses después, en agosto de 2000, el representante de la Fundación Produce en la región Sur de Jalisco, aseguró que quince de las sesenta factorías azucareras del país sufren graves atrasos tecnológicos y enfrentan elevados pasivos financieros y, en consecuencia probablemente muy pronto cerrarán.<sup>27</sup>

También paradójicamente, al mismo tiempo que se acentúan estos problemas de las factorías azucareras del país, se intensificaron los subsidios del gobierno federal hacia los industriales azucareros.<sup>28</sup> Así destacan los apoyos económicos que desde 1997, y en forma anual, reciben dichos industriales como estímulos para, por un lado, exportar una parte de sus excedentes de azúcar y, por otro lado, para cubrir el costo financiero derivado del almacenamiento anual de unas 600 000 toneladas de azúcar.<sup>29</sup> De igual manera, también es importante la nueva reestructuración de los saldos de los ingenios azucareros, anunciada en diciembre de 1998, donde se otorga un plazo de hasta quince años para el pago de los adeudos bajo el mismo esquema de las unidades de inversión (UDIs), con una ampliación del periodo de gracia por tres años más y a una tasa de interés de 7,5 % real.

### **Las causas de la crisis vigente en la industria azucarera mexicana**

Entre las circunstancias adversas que han generado la crisis citada, se ha puesto en el centro del debate la presencia creciente en el mercado nacional de edulcorantes sustitutos del azúcar, particularmente del jarabe de maíz rico en fructuosa.<sup>30</sup> Los industriales azucareros mexicanos cuestionan que la presencia de este edulcorante en el mercado nacional es indebida porque durante los años 1995 a 1997 esta se importó libremente desde Estados Unidos, al amparo del TLCAN. A partir de enero de 1998, cuando el gobierno mexicano decretó un sistema de tarifas arancelarias a la importación de alta fructuosa, los propietarios de los ingenios azucareros también se han pronunciado contra la producción interna de alta fructuosa a base de maíz importado a precio subsidiado por el gobierno estadounidense y con tasa cero de importación gracias a los cupos



que la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial (SECOFI) de México concertó con las empresas nacionales fabricantes de este edulcorante. En defensa de la posición de los industriales azucareros mexicanos respecto a la presencia indebida de alta fructuosa en el mercado nacional, al senador Fidel Herrera <sup>31</sup> le parece cuestionable que en los primeros seis años de vigencia del TLCAN (1994 a 2000) México apenas haya podido exportar unas 116 000 toneladas de azúcar a Estados Unidos (véase tabla 1), mientras que desde aquel país han entrado a México 1,3 millones de alta fructuosa.

Según los industriales la presencia indebida de alta fructuosa hace crecer el superávit de azúcar nacional y entonces, se ven afectados doblemente. Por una parte se reduce el consumo interno de azúcar y bajan los precios de este edulcorante en el mercado nacional. Por otra parte, sus recursos se transfieren al exterior debido al incremento de las cuotas de exportación <sup>32</sup> de una parte de sus excedentes de azúcar en el mercado residual internacional <sup>33</sup> a precios de hasta 43 % por debajo de sus costos de producción.

Para exaltar la incesante pérdida de valor de sus productos y en consecuencia, los problemas financieros cada vez más agudos para sostener sus actividades productivas, desde 1998 los propietarios de los ingenios azucareros también han trasladado sus quejas en contra: por un lado, de los altos precios que deben pagar por la caña de azúcar conforme a la regulación que establece el “contrato cañero”, según la “fórmula harvariana” que antes mencionamos; y por otro lado, de las graves cargas fiscales impuestas por el “contrato ley” a favor de los trabajadores de esta agroindustria.

En congruencia con estas quejas, no han faltado las fricciones entre los industriales y los agricultores. Así, casi al final de la zafra 1998-1999 el dirigente nacional de los productores de caña de azúcar del sector social expresaba el malestar de sus representados contra los dueños de las factorías azucareras por la falta de recursos para cubrir las labores de cultivo, así como por el retraso para recibir las preliquidaciones y la liquidación final. <sup>34</sup> Más aún, en el primer trimestre del año 2000, el Grupo Azucarero México (GAM) suspendió el pago a sus proveedores de caña de azúcar de sus cinco ingenios azucareros. <sup>35</sup>

Bajo ese mismo contexto, la polarización entre los industriales y los obreros azucareros ha sido mayor. En efecto, en octubre de 1999 los trabajadores de cincuenta y ocho ingenios estaban en huelga demandando el reparto de utilidades así como el pago de 112 millones de pesos, aproximadamente, por concepto de apoyos para la construcción de viviendas y para el fondo de jubilaciones y de servicios médicos. <sup>36</sup> Un año después, el 16 de noviembre de 2000, los trabajadores del mismo número de factorías azucareras iniciaron otra huelga al no llegar

a un acuerdo con sus patrones sobre la demanda de un 25 % de aumento en las percepciones salariales, el pago de un adeudo de 94 millones de pesos por parte de los empresarios para el fondo de jubilaciones y sobre todo, en lo referente a las modificaciones a la edad de retiro de los obreros que los industriales azucareros pretenden incrementar de 60 a 65 años.

Funcionarios del gobierno federal y analistas de esta industria, en cambio, precisan que los problemas actuales de la industria azucarera nacional también derivan de las propias deficiencias de organización y operación de esta agroindustria. Así, se cuestiona la falta de una política de comercialización que evite saturar el mercado interno y que permita planear los excedentes de producción y exportar de manera ordenada y mediante un programa único que involucre a toda la industria azucarera.<sup>37</sup> Más aún, algunos directivos de grupos azucareros del país acusan a sus homónimos de una especie de rivalidad mal entendida donde lo que importa no es producir el azúcar al menor costo posible y ponerla a la venta con su respectivo porcentaje de ganancia, sino más bien atrayendo clientes con créditos, descuentos y precios por debajo de los costos de producción aprovechando, incluso, una parte del azúcar que supuestamente debió haberse vendido en el exterior con apoyos financieros del gobierno federal para esos fines.<sup>38</sup> Adicionalmente se dice que el problema de algunos grupos industriales azucareros tienen su origen en la falta de previsión de estos para adaptarse a un entorno más competitivo: muchos de ellos compraron ingenios dispersos entre sí, y en algunos casos con bajos niveles productivos, apostando por una ampliación creciente de la demanda de azúcar y por la intervención estatal a favor de un modelo de protección partidario de garantizar el estatus de “interés social” de las actividades que integran esta agroindustria.

## Consideraciones finales

Previo al inicio de la zafra 2000-2001, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER)<sup>39</sup> aseguró que la resolución de los problemas de esta agroindustria será un reto de gran envergadura para la administración del presidente Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 a 30 de noviembre de 2006). Más aún, para algunos analistas es inevitable la puesta en marcha de un nuevo programa de rescate financiero para la industria azucarera que podría costar entre 1 200 y 1 600 millones de dólares.<sup>40</sup>

El valor de estas apreciaciones adquiere mayor peso si consideramos que México no cuenta necesariamente con una ventaja comparativa en el mercado

internacional de este edulcorante ya que los costos de producción internos son estimados en por lo menos el doble del nivel mundial.<sup>41</sup>

Será de vital importancia seguir con atención si la administración del presidente Fox seguirá apostando a subsidiar los malos negocios de los empresarios de este sector bajo un esquema que podrá seguir siendo interpretado como transicional y de apoyo a una industria que se está ajustando a los nuevos tiempos del mercado global. Si por el contrario, se apuesta por una industria competitiva donde solo permanezcan las factorías con mayores posibilidades para enfrentar la nueva situación del mercado internacional, habrá que anteponer las acciones alternativas que habrán de emprender la población relacionada con las actividades productivas de los ingenios azucareros que deberán cerrar.

En cualquiera de las alternativas el principal problema para mejorar el desempeño de la industria azucarera nacional radica en la búsqueda y generación de espacios donde todos los actores tengan la posibilidad de manifestarse, ser tomados en cuenta en los consensos pero también de que ellos mismos respeten el cumplimiento de los acuerdos contraídos. En todo caso, se considera que para avanzar es necesario detenerse y evaluar los resultados de la privatización precisando, por ejemplo: ¿Dónde han quedado los beneficios del incremento en la oferta nacional de azúcar de los últimos años? ¿Realmente estos se han ido al exterior, con la venta de azúcar nacional en el mercado residual internacional a precios por debajo de sus costos de producción? ¿Hasta qué grado los recursos financieros del Estado han soportado las pérdidas que los industriales azucareros privados dicen tener desde que compraron las factorías? ¿Hasta dónde la privatización de esta industria favoreció la cooperación entre los dueños de los ingenios y sus proveedores de caña de azúcar? ¿Hasta qué punto los agricultores cañeros han tenido la capacidad de negociación suficiente para no tener que asumir el mayor peso de los efectos negativos de las debilidades citadas en esta agroindustria? ¿Frente a la inevitable globalización de la economía es realmente inviable que en las actividades productivas de la industria azucarera coincidan la iniciativa privada y el Estado?

Desde una escala apropiada a cada ingenio azucarero, deberán evaluarse los niveles de eficiencia en fábrica así como las condiciones que imperan en las tierras que los abastecen de caña de azúcar. Ciertamente, ante un entorno cada vez más competitivo, es imperativo mejorar la tecnología y la infraestructura productiva. En esto, la preservación de los recursos naturales debe ocupar un lugar preponderante. En paralelo deberán ajustarse los esquemas de organización y representación de cada uno de los actores involucrados en esta actividad. Aquí es necesario sustituir las viejas prácticas de sub-contratación donde

los dueños de las factorías azucareras imponen sus decisiones sobre sus proveedores de caña de azúcar, por formas de colaboración más dinámicas entre los diferentes actores de esta agroindustria. En ese sentido, por ejemplo, la negociación entre los productores de caña de azúcar y los dueños de las factorías azucareras no deben quedarse en el reparto de utilidades, como sucede esencialmente hasta la fecha, sino que además deben incluirse mecanismos contractuales explícitos sobre la repartición del riesgo y la asunción de diversas tareas tales como el crédito y financiamiento de las actividades productivas, la innovación tecnológica, el mejoramiento genético de las especies cultivadas y el uso durable de los activos.

Se considera que un esquema más colaborativo entre proveedores de caña de azúcar e industriales azucareros, permitiría ir más allá de la diversificación de productos derivados de la caña de azúcar, que últimamente se promueve como una solución para los problemas de esta agroindustria. Me parece que bajo esquemas de este tipo, adicionalmente podrían consolidarse una especie de “carteles regionales” que al mismo tiempo que garanticen el acceso al crédito financiero, la compra de los productos y las prestaciones sociales de que disponen los agricultores cañeros, promoverían iniciativas para que las tierras que actualmente se cultivan con caña de azúcar se diversifiquen hacia otros productos agrícolas e incluso hacia otras actividades, incluyendo el barbecho o descanso de una parte de estas. Esto, no solo ayudaría a regenerar y a mejorar los recursos naturales disponibles. También facilitaría la puesta en marcha de un proceso de reordenamiento de las actividades productivas en las áreas de influencia de cada ingenio azucarero conservando el nivel de los volúmenes de producción de azúcar y sin provocar los conflictos sociales que se supone surgirán con el cierre de varios ingenios del país y con la disminución de tierras sembradas con caña de azúcar en el resto de las factorías azucareras que se mantengan en actividad.

## Notas

<sup>1</sup> De esta manera, de los 68 ingenios azucareros que estaban funcionando en el país, 56 eran administrados por el gobierno federal y 14 por la iniciativa privada (*El Informador*, 21 de octubre de 1988).

<sup>2</sup> Según García (1997:31) los edulcorantes se clasifican en dos grandes grupos: los no calóricos o artificiales y los calóricos. Dentro de los edulcorantes artificiales se encuentran productos como el aspartame (Nutra Sweet), la sacarina, el acesulfame-k (Sunett), la sucralosa, el stevioside, el alitame y el taumatín. Entre los edulcorantes calóricos están el azúcar, la miel de abeja y el jarabe de maíz rico en fructuosa (JMRF). Por el porcentaje de fructuosa que contiene este último se clasifica en JMRF-42 y JMRF-55.

<sup>3</sup> De acuerdo con García (1997: 13), ese fue uno de los objetivos prioritarios de este programa impulsado por la administración de Miguel de la Madrid.

<sup>4</sup> Para ejemplificar el monto de estos subsidios, García (1997: 19, citando a Soto) menciona que en el año de 1982 se incrementó el subsidio de 23 centavos a 63 centavos por cada peso de recursos propios que generó la industria azucarera. Por lo que respecta a los créditos otorgados por el gobierno federal, este mismo autor apunta que en 1986 se calculaban quebrantos anuales de entre 40 y 50 000 millones de pesos, por este concepto.

<sup>5</sup> De acuerdo con una nota de Gerardo Otero publicada en el diario *El Occidental* (24 de junio de 1988), en esa ocasión el gobierno federal manifestó su intención de vender 17 de los 56 ingenios controlados a través de Azúcar, S.A., instancia que aglutinaba las acciones del Estado en relación con la industria azucarera.

<sup>6</sup> Varias notas publicadas sobre el tema durante los meses de mayo a noviembre de 1988 en los diarios *El Occidental* y *El Informador*.

<sup>7</sup> En octubre de 1988, Jesús González Gortázar, líder de la Unión de Productores de Caña de Azúcar afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), criticaba la política gubernamental en lo que se refiere a la venta de los ingenios porque lejos de beneficiar a las organizaciones de productores de caña de azúcar se han entregado a empresas refresqueras vinculadas a intereses transnacionales. El mismo líder precisa que a diferencia de estos “grupos de oligarcas proimperialistas”, a las organizaciones de productores se les dificulta la adquisición de ingenios por su “falta de dinero en efectivo para dar el enganche, que equivale al 15 % del valor de cada factoría” (véase *El Informador*, 21 de octubre de 1988).

<sup>8</sup> Entre los grupos conformados por industriales refresqueros que compraron los ingenios con la idea de asegurar el suministro de la materia prima destacan: el Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE) cuyo accionista mayoritario es Enrique Molina Sobrino, el principal franquiciario de Pepsicola en México; la Promotora Industrial Azucarera (PIASA) filial del Grupo Continental (CONTAL) que es el único de los 11 consorcios que conforman el grupo Coca Cola en México que compró ingenios azucareros; el Grupo Azucarero México (GAM) que constituye la división azucarera del Grupo Embotelladores Unidos de Pepsicola (GEUPEC); el Grupo Abelardo García Arce (AGA), que producía varias marcas de bebidas nacionales no alcohólicas como Jarritos y Titán ; y Embotelladora del valle de Anáhuac (EMVASA) filial de la Asociación Nacional de Empresas Refresqueras Mexicanas (ANERMEX) que manejaba varias marcas nacionales de refrescos tales como Mundet.

<sup>9</sup> Aquellos ingenios azucareros donde una parte de su producción, hasta un 80 % del total, es consumida en las actividades productivas de sus accionistas se les reconoció como ingenios “integrados”. En cambio, a aquellas factorías azucareras cuya producción es vendida esencialmente a terceros, principalmente para consumo doméstico, se les llamó ingenios “tradicionales”.

<sup>10</sup> Si nos atenemos a las declaraciones del director del grupo CONTAL, en el caso de los accionistas de la industria refresquera la adquisición de ingenios azucareros también fue dada por el interés de que sus embotelladoras no dependieran de terceros para proveerse de edulcorantes. Asimismo, la compra

de ingenios azucareros fue considerada como una posibilidad para reducir los costos de sus materias primas (véase *Azúcar y Fructuosa*, diciembre de 1998).

<sup>11</sup> Durante la zafra 1999-2000 la industria azucarera sigue siendo considerada como de interés público porque de ella dependen de manera directa 40 000 familias, y porque en forma directa e indirecta de ella dependen alrededor de 2,5 millones de mexicanos. En la zafra citada, la caña de azúcar se cultivó por unos 150 000 agricultores (75 000 de los cuales se encuentran afiliados a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; 60 000 a la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR; y el resto son cañeros independientes). En los 60 ingenios azucareros que operaron en dicho ciclo, trabajaron unos 45 000 obreros sindicalizados y cerca de 8 000 empleados administrativos. En las labores de cosecha se emplearon unos 100 000 cortadores y 25 000 transportistas. El cultivo citado ocupa unas 700 000 hectáreas (el quinto cultivo del país en superficie sembrada) de 194 municipios distribuidos en 15 de las 32 entidades del país. Adicionalmente, la industria azucarera mexicana contribuye aproximadamente con el 0,5 % del PIB nacional.

<sup>12</sup> Este Comité de la Agroindustria Azucarera quedó integrado (y presidido) por un representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (actualmente Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, SAGAR), un representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), dos representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica, un representante de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC, que agrupa a los agricultores del régimen de propiedad social), y otro más de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP).

<sup>13</sup> En este caso se incluye las actividades requeridas para supervisar la cantidad de caña de azúcar entregada y evaluar la cantidad de sus impurezas al momento de su recepción en el Batey de la fábrica; la verificación de los problemas que afecten la operación normal de la molienda y obstaculicen la recepción de las cañas en proceso de corte y; para confirmar la información suficiente para calcular el azúcar recuperable de la caña industrializada.

<sup>14</sup> No obstante, para regular el impacto negativo generado en el mercado interno con esta medida, desde principios de 1991 el gobierno federal decidió aplicar un arancel variable a este tipo de importaciones. Para desestimular completamente las importaciones de azúcar, desde abril de 1993 hasta febrero de 1995 adicionalmente también se autorizaron varios aumentos al precio interno del azúcar. En agosto de 1995 se liberó el precio del azúcar en el mercado interno.

<sup>15</sup> En estas cuotas anuales debe entenderse que el año calendario base 1994, por ejemplo, corresponde al período fiscal octubre de 1994 a septiembre de 1995, y así sucesivamente.

<sup>16</sup> De no indicarse otra fuente, los datos de este apartado tienen como fundamento la información de *Azúcar y Fructuosa*, publicación mensual (editada ininterrumpidamente desde marzo de 1998) especializada en el tema citado.

<sup>17</sup> Si nos atenemos a las notas publicadas sobre el tema durante los meses de octubre de 1988 a mayo de 1989 en los diarios *El Occidental* y *El Informador*, podemos suponer que estas deficiencias en el cálculo están ligadas a la tardanza con que algunas de las factorías fueron entregadas a sus nuevos dueños. En ese mismo sentido debe reconocerse las deficiencias para concentrar el registro de los volúmenes de producción y de importación por parte de los agentes privados.

<sup>18</sup> En 1990 estas importaciones fueron cuantiosas tanto por la eliminación de los permisos de importación (en noviembre de 1988), según mencionamos antes, como por el incremento de un 25 % en el precio del azúcar durante los meses de febrero a noviembre de 1990. Desde febrero de 1991 el gobierno federal buscó resolver este problema estableciendo un arancel que se modificaba cada mes, hasta abril de 1993, y luego por medio de cuotas arancelarias con base al diferencial entre el precio del azúcar y el precio de concertación fijado temporalmente. No obstante, este arancel fue insuficiente para desestimular completamente las importaciones (García, 1997).

<sup>19</sup> Según Otero y Singelmann (1996: 190, citando cifras de la Cámara Nacional Azucarera) entre 1990 y 1992 las pérdidas anuales de la industria azucarera en su conjunto crecieron de 305 millones de pesos a 984 millones de pesos.

<sup>20</sup> Según García (1997: 107 citando a Soto) el 1 de junio de 1995 la deuda de los industriales azucareros con FINASA era de unos 10 000 millones de nuevos pesos. FINASA fue creada el 1 de febrero de 1943 como institución privada, financiera y fiduciaria; en agosto de 1953 se convirtió en Institución Nacional de Crédito; y en julio de 1985 se transforma en Sociedad Nacional de Crédito, como una institución de la banca de desarrollo del gobierno. Desde 1998 FINASA dejó de otorgar créditos y sus funciones se concentraron en la recuperación de los saldos pendientes. De hecho, en agosto de 2000 la comisión gasto- financiamiento del gobierno federal aprobó su liquidación. Se supone que su cierre ocurrirá con el inicio de la administración del presidente Vicente Fox, con lo cual los saldos de los ingenios azucareros serán transferidos y administrados por el Fideicomiso Liquidador del Gobierno (Fideliq).

<sup>21</sup> Entre otras cosas, destacan el incumplimiento de los industriales respecto a la construcción de casas, pago de jubilaciones y cuotas sindicales, así como aportaciones a la clínica azucarera y el pago de las cuotas del Seguro Social.

<sup>22</sup> El decreto cañero de 1991 establece que los ingenios harán una preliquidación equivalente al 80 % de la caña neta recibida a más tardar un mes después del corte de la caña de azúcar. La liquidación final, en cambio, debe realizarse en un plazo de 30 días a partir de la terminación de la zafra correspondiente.

<sup>23</sup> Véase Siglo 21 (1 de febrero de 1996).

<sup>24</sup> Entrevistado por Ma. Guadalupe Cruz y Elvia Hernández reporteras de Azúcar y Fructuosa (enero del 2000: 7)

<sup>25</sup> Las unidades de inversión es un instrumento financiero empleado para realizar operaciones de inversión, de crédito o transacciones comerciales, tomando en cuenta la inflación y una tasa de interés fija (véase Ortega, 1997). Como parte de este proceso de reestructuración, también se instrumentó un sistema de “quitas” o reducción de los adeudos en 21,8 % por pronto pago.

<sup>26</sup> Véase *El Informador* (29 de noviembre de 1998).

<sup>27</sup> Véase *Público* (19 de agosto de 2000).

<sup>28</sup> Según Luis Soto, reportero de *Azúcar y Fructuosa* (julio de 2000) citando datos de un documento oficial titulado “Nota conjunta SHCP, SECOFI, SAGAR, STPS”, los subsidios implícitos y explícitos otorgados por el gobierno federal durante el periodo 1995 a 1999 ascienden a 8 938 millones de pesos (a precios de 2000).

<sup>29</sup> Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citados por *Azúcar y Fructuosa* (enero de 2000), en 1997 las exportaciones de excedentes fueron subsidiadas con 327 millones de pesos. En 1998 y 1999, a fin de cubrir el costo derivado del almacenamiento de unas 600 000 toneladas de azúcar, los industriales azucareros recibieron apoyos económicos, condicionados al cumplimiento de cuotas de exportación, por 94 millones y 200 millones de pesos, respectivamente.

<sup>30</sup> Por razones de precio fundamentalmente, y según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citados en *Azúcar y Fructuosa* (enero de 2000 : 3- 5), de 1995 a 1998 el consumo de alta fructuosa en México se incrementó de 54 000 toneladas a 490 000 toneladas, es decir un incremento de 800 %. De 1998 al 2000 el consumo de alta fructuosa en el mercado nacional se ha estabilizado en unas 500 000 toneladas (aproximadamente la mitad son producidas en el país y la otra mitad se importan desde Estados Unidos), gracias a un conjunto de medidas impulsadas por el Estado para proteger a la industria azucarera nacional. Entre estas medidas destaca la expedición de un decreto, en enero de 1998, mediante el cual se sustituye la libre importación de este edulcorante desde Estados Unidos por un sistema de cuotas con aranceles fiscales a la importación de alta fructuosa. Adicionalmente, se dice que esta estabilización del consumo de alta fructuosa obedece tanto a un acuerdo celebrado en el verano

de 1997 entre la industria refresquera y la productora de azúcar para limitar el consumo de alta fructuosa, como a la conminación que, supuestamente el gobierno federal formuló a las empresas nacionales fabricantes de jarabe de maíz de alta fructuosa para que no incrementen sus volúmenes de producción.

<sup>31</sup> Entrevistado por Ma. Guadalupe Cruz reportera de *Azúcar y Fructuosa* (octubre de 2000).

<sup>32</sup> Estas cuotas de exportación fueron sugeridas en 1997 por el gobierno federal como una medida que los industriales deberían acatar de manera voluntaria a fin de no saturar el mercado nacional y, en consecuencia, no disminuir de manera drástica el precio interno del azúcar. No obstante, debido a la indiferencia de varios industriales, desde 1998 los ingenios azucareros están obligados a exportar los volúmenes acordados o de lo contrario se harán acreedores a una sanción económica y a la cancelación de su cuota de exportación a los Estados Unidos. Las cuotas de exportación por ingenio azucarero se establecen por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con base a un factor que, en términos generales, toma en cuenta la producción nacional de los últimos cinco años y el consumo doméstico, así como la participación de cada factoría en el mercado nacional.

<sup>33</sup> El mercado residual o libre consiste en la diferencia entre la producción mundial de azúcar y la que se destina al consumo interno de los países productores más el volumen que se negocia mediante acuerdos preferenciales entre países. De acuerdo con García y Escalante (1997: 977) el mercado residual internacional es un espacio distorsionado en donde los países productores colocan sus excedentes a precios inferiores a sus costos de producción para al menos cubrir sus costos fijos. De acuerdo con estimaciones de *Azúcar y Fructuosa* (agosto de 2000: 6), durante la zafra 1999-2000 México colocó en el mercado residual internacional alrededor de 254 000 toneladas de azúcar.

<sup>34</sup> Véase *Azúcar y Fructuosa* (junio de 1999: 5).

<sup>35</sup> En el caso del ingenio José María Martínez en Tala, Jalisco, 60 % de sus proveedores de caña de, azúcar aún no recibían el pago correspondiente en el mes de septiembre de 2000.

<sup>36</sup> Véase Mural (12 de octubre de 1999).

<sup>37</sup> Para ejemplificar esta debilidad suelen usarse los resultados del Fideicomiso para la Organización del Mercado de Azúcar (FORMA) creado por el gobierno federal en 1994 a fin de regular el mercado del azúcar y establecer mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda, dando certidumbre al abasto nacional y poner en marcha una bolsa de físicos. El fracaso más divulgado es el caso de la “ventanilla única con financiamiento” puesto en marcha a finales de enero de 1997 con el objetivo de ordenar la comercialización de azúcar en las principales centrales de abasto del país a fin de controlar el desorden de precios imperante desde tres años antes en el mercado y al mismo tiempo impulsar al alza las cotizaciones de este producto. El esquema propuesto consideraba un sistema de cuotas, 1 500 toneladas diarias, para media docena de grupos azucareros (Zucarmex, GAM, CAZE, Santos, Machado y San José de Abajo) que supuestamente serían los únicos que podrían vender azúcar estándar en la central de abastos de la ciudad de México (CEDA-MX) en función de un parámetro de precios variable de acuerdo con la cantidad de azúcar que los clientes adquirieran y que serían la base nacional para el resto de las centrales de abasto del país. Debido a que estos precios serían los más bajos de todo el país, se desalentaría a otros ingenios azucareros a desplazar sus productos al centro de abasto de la capital mexicana. El primer paso para implementar el esquema fue “secar” el mercado, por lo cual ningún ingenio azucarero debería desplazar azúcar estándar a la CEDA-MX al menos durante un par de semanas. No obstante, al término del plazo fijado seguía encontrándose azúcar por debajo de los precios establecidos, supuestamente por la influencia de las preventas hechas por algunas empresas comercializadoras de azúcar. Enseguida los propios participantes ampliaron las cuotas de venta y, posteriormente autorizaron disminuir los precios hasta que finalmente, a finales de febrero de 1997, terminaron por reconocer que el sistema de “ventanilla única” había concluido.

<sup>38</sup> En este caso destacan las acusaciones del presidente del Grupo Azucarero Mexicano (GAM) sobre la actuación del Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), entre otros grupos azucareros del país (véase *Público*, 22 de mayo de 2000).

<sup>39</sup> Véase *Público* (22 de noviembre de 2000).



<sup>40</sup> Véase *Público* (27 de noviembre de 2000).

<sup>41</sup> Así lo precisa el dirigente de los cañeros del ingenio de Tamazula, Jalisco, quién en agosto de 2000 (*Público*, 19 de agosto de 2000) mencionó que el azúcar producido en México tiene un costo promedio de 4,3 pesos por kilo, contra 2,2 pesos del mercado mundial. Esto también se reafirma en un documento del Departamento de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, citado por *Azúcar y Fructuosa* (junio de 1999: 3) donde además se sostiene que los elevados precios internos del azúcar junto a la posición de México como productor significativo de azúcar, derivan de la alta protección arancelaria de esta agroindustria y de las medidas de política interna que promueven la cooperación entre los industriales azucareros y restringen la competencia entre estos.

## Bibliografía

- García Chávez, Luis Ramiro: *La agroindustria azucarera de México frente a la apertura comercial*. Universidad Autónoma Chapingo, México, 1997.
- García Chávez, Luis Ramiro y Escalante Semerena, Roberto: “La agroindustria azucarera de México en el marco de la apertura”, en *Comercio Exterior*. Vol. 47, No. 12. BANCOMEX, México, 1997.
- García Chávez, Luis Ramiro: “La agroindustria azucarera de México y el tratado de libre comercio” en Rita Schwentenius, Manuel Angel Gómez y Gary W. Williams: *TLC y agricultura ¿Funciona el experimento?* CIESTAAM y Juan Pablos Editor, México, 1997.
- Ortega Cervantes, Gonzalo: “Las unidades de inversión como solución a los créditos hipotecarios y alternativas de ahorro”, en *Carta Económica Regional*. No. 56, Universidad de Guadalajara, México, 1997.
- Otero, Gerardo y Peter Singelmann: “Los cañeros y el Estado en México: garantías sociales y reestructuración económica en la industria azucarera” en Hubert C. De Grammont y Héctor Tejera Gaona (coordinadores generales) *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*. Vol. IV, UAM-A, UNAM, INAH y Plaza y Valdéz, S. A. de C.V. México, 1996.
- Suárez Blanca y Pérez, Fernando: “La modernización del campo y la alimentación: un recuento de los últimos años, 1982-1996”, en Luz María Espinoza (coordinadora): *Sector agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaria y nutrición en México*. Plaza y Valdés, S.A. de C.V., México, 1999.

## Fuentes Hemerográficas

- Azúcar y Fructuosa*. Publicación mensual editada y distribuida por EPESA, de C.V., México, D.F. Números 1 (marzo de 1998) a 32 (octubre de 2000).
- Diario Oficial de la Federación*. 31 de mayo de 1991. México.
- Diversos diarios editados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, tales como *Público*; *El Informador*; *El Occidental*; *Mural*, *Siglo 21* y *Ocho Columnas*.

## Anexos

**Tabla I**  
**Acceso del azúcar mexicana, libre de impuestos, al mercado estadounidense.**  
**Comparativo entre el texto original del TLCAN y las cartas paralelas**

Acceso	TLC original	Cartas Paralelas	Volumen exportado (toneladas por año)
<b>Años 1-6 (1994-1999)</b> México no es productor superavitario	Preparticipación de 7 258 toneladas según la cuota para "otros países" de la TQR (Tarifa de Cuota Estadounidense)	Igual	Año 1 y 2: 7 258 Año 3 a 6: 25 000
México productor superavitario	25 000 toneladas como máximo	Igual	
<b>Años 7-14 (2000-2007)</b> México no es productor superavitario	Preparticipación de 7 258 toneladas según la cuota para "otros países" de la TQR (Tarifa de Cuota Estadounidense)	Igual	Año 7: 116 000 *
México es productor neto 1 año	Año 7: 150 mil tm; Años 8-14 : 110 % en relación con el año anterior	Producción mexicana sobrante hasta un máximo de 250 000 toneladas métricas cada año	
México productor neto 2 años consecutivos	Toda la producción superavitaria	Suprimida	
<b>Año 15 (2008) y sucesivos</b>	Mercado común México-E.U.; mismos sistemas y política azucarera interna y mismos aranceles para terceros países.	Igual	
Definición de productor superavitario	Producción de azúcar menos consumo de azúcar	La producción de azúcar menos la suma del consumo de azúcar y alta fructuosa	

***Fuente:** Con base en datos de Azúcar y Fructuosa (varios números)*

*\* Volumen autorizado por el gobierno estadounidense.*

**Tabla II**  
**Balance consumo- producción de azúcar en México (toneladas)**

Año	Consumo nacional	Producción nacional	Déficit o superávit
1987*	3 428 016	3 045 675	382 341
1988	3 510 772	3 591 652	- 80 800
1989	3 733 752	3 467 893	-265 859
1990	3 894 764	3 173 679	-721 085
1991	3 953 186	3 660 651	-292 535
1992	4 012 483	3 284 179	-728 304
1993	4 173 483	4 076 483	-97 000
1994	4 256 952	3 549 229	-707 723
1995**	4 100 000	4 500 000	400 000
1996	3 983 800	4 377 453	393 653
1997	3 873 900	4 543 850	669 950
1998	4 025 600	5 174 027	1 148 427
1999	4 109 800	4 699 000	589 200
2000	4 226 000	4 881 300	655 300

*Fuente:* Para los años 1988 a 1994 de García (1998: 233). Para 1995 de Público (01 de febrero de 1996 citando al presidente de la Unión Nacional de Cañeros). El resto de los años de Azúcar y Fructuosa (varios números).

\*El año indicado corresponde al periodo fiscal octubre de 1986 a septiembre de 1987, y así sucesivamente.

\*\*Los datos para 1995 son valores redondeados.

**Tabla III**  
**Deuda total de la industria azucarera mexicana**

Tipo de deuda por institución	Millones de pesos	%
FINANCIERA	18 970	75,34
FINASA	14 389	
Banca Comercial	4 130	
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	660	2,62
INFONAVIT	660	2,62
Comisión Nacional del Agua	4 800	19,06
Sindicato azucarero	92	0,36
<b>TOTAL</b>	<b>2 5182</b>	<b>100,0</b>

*Fuente:* Azúcar y Fructuosa (enero del 2000 : 4) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.